

No. 517
1ra. Semana
Octubre 2017
Año: XI
Cuarta Época

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE

Nuestro TIEMPO

UNA PUBLICACIÓN DE NOLOGO GRUPO S.A. DE C.V.



Supermineras: la doble cara canadiense



nologo

Selene Hernández León
Fundadora

Miguel Ángel Alvarado López
Director General

Mercadotecnia y suscripciones
Juan Manuel Hernández León

LDG. Fabiola Díaz Rosales
OM DISEÑO

Luis Enrique Sepulveda
Ilustración

Fotografía
Lluvia Ácida

Direcciones electrónicas
nuestro_tiempo2003@hotmail.com
nologo_news@hotmail.com
ventasnologo@hotmail.com

nuestrotiempotoluca.wordpress.com
www.nuestrotiempotoluca.com.mx

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

Año X
No. 517
Primera Semana de Octubre del 2017
Es una publicación semanal editada por:
Nologo Grupo, S.A. de C.V.

Avenida Eulalia Peñaloza 132,
Col. Federal, CP 50120,
Toluca, Estado de México.
Tel: 197 74 23 y 2 1775 43.

Editor responsable: Miguel Ángel Alvarado López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-060614490300-101, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en Trámite. Impresa por Miguel Fermin Pulido Gómez en Metepec, Estado de México, en el Barrio de San Mateo Abajo calle Mariano Matamoros 10, CP. 52140. Tel. 232 7144. Este número se terminó de imprimir el 9 de Octubre del 2017 con un tiraje de 5 mil ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.



@Nuestro_Tiempo

EN PORTADA

Crédito/ Outlet Minero.

Suscripción

FOLIO

POR UN AÑO: \$520.00 M.N
SEIS MESES: \$260.00 M.N

FECHA DE INICIO DE SUSCRIPCIÓN:

FINAL DE SUSCRIPCIÓN: _____

A NOMBRE DE: _____

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CALLE: _____

COLONIA: _____

MUNICIPIO: _____

CÓDIGO POSTAL: _____

TELÉFONO: _____

SEMENARIO NUESTRO TIEMPO
EULALIA PEÑALOZA 132, COL. FEDERAL, TOLUCA, MÉX.

TEL.: 01722-197•74•23/ 044722•590 67 69

Juan Manuel Hernández / Ventas

R
E
S
S
O
D

** El gobierno de Canadá divulga en el sitio web canadainternational.gc.ca que ha forjado una industria minera de clase mundial y que hasta 2014 había en México cerca de 200 compañías, sosteniendo, sin rubor alguno, que las “mineras canadienses contribuyen con tecnología minera verde para mejorar el desempeño ambiental, establecen altos estándares de seguridad, ayudan a crear programas sociales locales y proveen educación y entrenamiento en habilidades para apoyar la inversión a largo plazo en las comunidades locales en México”. Incluso, en 2009 el gobierno de ese país editó un manual para difundir lo maravillosas que son sus empresas.*

Supermineras: la doble cara canadiense



Crédito/ oxfamintermon.org

Miguel Alvarado
Francisco Cruz
Félix Santana

Un informe del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (DFAIT, por sus siglas en inglés) reveló depósitos por 204 mil 22 pesos a la cuenta bancaria del entonces alcalde de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón, para facilitar las operaciones de la minera, la cual había armado a sus empleados.

En agosto de 2009 tres trabajadores vestidos con el uniforme de la minera golpearon a Mariano Abarca en su domicilio. Lo amenazaron con armas largas, pero fue en vano: él no se iría. Una semana antes de que fuera ejecutado a tiros, afuera de su restaurante, un gatillero lo había amenazado de muerte.

La Mining Watch Canada Mines Alert, la Common Frontiers y la United Steelworkers seña-

laron, en el documento Minería Canadiense en México: Blackfie Exploration y la Embajada de Canadá, un caso de corrupción y homicidio, que esa embajada había prestado “apoyo fundamental e inescrupuloso a las operaciones de la minera en este país” Rema, la organización de Bety Cariño, investigaba el asesinato junto con una delegación canadiense, al igual que los daños ambientales causados por la minera en los ejidos de Grecia, donde extraían la barita, y de Nueva Morelia, por donde la empresa pagaba un peaje para transportarla.

Reuniones con la Embajada de Canadá les dieron pistas cuando “la delegación se enteró de que un consejero político de la Embajada había viajado a Chiapas dos meses después de la muerte de la activista. La delegación solicitó una copia del informe de su viaje, pero este se negó a entregarlo.

Las organizaciones hicieron un pedido de acceso a la información y, tras 19 meses, el DFAIT difundió documentos de la Embajada vinculados al caso de la empresa minera Blackfire.

”Aun después del asesinato, de la clausura de la mina por contaminar y de las denuncias por corrupción, la Embajada siguió defendiendo a la empresa ante funcionarios mexicanos, además de entregar información a la Blackfire que le permitiera demandar al estado de Chiapas por clausurar la mina, de acuerdo con el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. El gobierno de Canadá divulga en el sitio web canadainternational.gc.ca que ha forjado una industria minera de clase mundial y que hasta 2014 había en México cerca de 200 compañías, sosteniendo, sin rubor alguno, que las “minerías canadienses contribuyen con tecnología minera verde para mejorar el desempeño ambiental, establecen altos estándares de seguridad, ayudan a crear programas sociales locales y proveen educación y entrenamiento en habilidades para apoyar la inversión a largo plazo en las comunidades locales en México”. Incluso, en 2009 el gobierno de ese país editó un manual para difundir lo maravillosas que son sus empresas.

“Lo que se les olvidó poner en ese manual —dijo en una entrevista radiofónica en 2010 el ambientalista Gustavo Castro— son los mecanismos que las empresas usan para contratar a sicarios y matar gente”.

La Blackfire había denunciado a Mariano Abarca, acusándolo de delincuencia organizada, daños al patrimonio de la empresa, ataques contra la paz y contra vías de comunicación, por lo que fue detenido el 17 de agosto y permaneció preso diez días.

Por su lado, Mariano había denunciado a ejecutivos de la minera porque “ya lo habían ido a buscar para quebrarle la madre a plomazos”.

La Blackfire salió de Chiapas para irse al Triángulo de la Brecha del Estado de México, en el municipio de Zacualpan, donde hace lo mismo: saca barita y amatista en una región cuyo entorno se adapta a sus radicales técnicas de extracción.

Bety Cariño había tenido tanto éxito que pronto estuvo en la mira del Ejército, las policías y los grupos paramilitares. Todos la persiguieron e intimidaron.

Rema denunció saqueos militares a casas de ejidatarios como una medida disuasiva antes de ejercer presiones más duras contra comunidades en Jalisco, San Luis Potosí y Oaxaca. El homicidio de Bety surtió efecto porque después de eso Rema bajó su perfil, al menos por un tiempo, debilitada desde el miedo, pero también porque los asesinatos continuaron en comunidades pequeñas.

En la opinión de los sobrevivientes, todas las organizaciones de derechos humanos encubren porque no investigan cuando se les informa quiénes ordenan las matanzas.

La pesadilla para Rema se extendió hasta 2016, fuera de México, cuando un comando asesinó a la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016, en el departamento de Intibucá. Ella se había opuesto al gigante chino Sinohydro, que construyó una hidroeléctrica, el proyecto Agua Zarca, con lo que privatizó el río Gualcarque y obligó a la población lenca a desplazarse.

La defensa de Cáceres fue exitosa, derrotó a los chinos y al gobierno hondureño en 2006 sorteando amenazas de militares y sicarios. El día de su asesinato estaba con ella el mexicano Gustavo Castro Soto, activista de Rema y de la Organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México. El mexicano —un ex jesuita, autor del ensayo Coca-Cola: la historia de las aguas negras— sólo resultó herido porque los asesinos lo creyeron muerto.

Como todos los asesinatos de este tipo, levantó indignación y generó protestas, pero ni una sola palabra del gobierno hondureño, que desde el primer minuto apostó por lo mismo que el mexicano: olvido por cansancio.

Por si ese cansancio no fuera suficiente, el 15 de marzo de 2016 un asesinato más, ahora de un militante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras, el mismo al que pertenecía Berta Cáceres, reforzó el mensaje de terror para los hondureños en lucha.

Nelson García tenía 38 años, pero cuatro tiros en la cara lo inmovilizaron para siempre, en la comunidad de Río Lindo. Días antes, había participado en la recuperación de tierras en esa región.

Quien sigue en pie de lucha es Evelia Baheña García, que detuvo cuatro años las operaciones de la superminera Torex Gold en el municipio de Cocula, Guerrero. **NT**

Antecedentes del narcoparamilitarismo

** En el año 2006, el Yunque y los Tecos reactivaron sus respectivas fuerzas de choque para, eventualmente, proceder con violencia contra Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes, al reclamar que se limpiaran las elecciones presidenciales. Las dos organizaciones secretas, se reagruparon para emprender durante la contienda presidencial, y mediante los sectores que controlan, acciones de propaganda contra López Obrador; acuartelándose para garantizar el triunfo del entonces candidato del PAN, Felipe Calderón.*

Ramón César
González Ortiz
Rebeliónz

La política exterior norteamericana hacia Latinoamérica, inscrita en el espectro de la contrarrevolución, incluyó a la lucha ideológica como una instancia cada vez más decisiva, convergente con las acciones militares y políticas más novedosas de la Guerra de Baja Intensidad, emprendidas durante los años ochenta en América Central.

De suerte que, la ofensiva religiosa conservadora emprendida en América Central tiene sus raíces en una reformulación estratégica emprendida desde los Estados Unidos, dado que, los aparatos religiosos proveen meditaciones nacionales con inserción de masas, constituyen instituciones especializadas, con asentamiento en la población y credibilidad, capaces de favorecer el consenso activo y organizado, aspectos nodales para ganar los Conflictos de Baja Intensidad.

Constatándose la importancia de la religión en momentos de crisis como la fase armada de la contrarrevolución, así como en las etapas preventivas de la misma. Motivos por los cuales, se ha acudido a la “ayuda” tanto de las iglesias protestantes como católicas.

Respecto al protestantismo, particularmente contra los cristianos, Reagan durante su mandato, privilegia escrupulosamente la ofensiva ideológico-política contra las iglesias progresistas de Estados Unidos y de América Latina. Para tales efectos, utiliza aparatos como el Institute on Religion and Democracy. Siendo éste un aparato específico de lucha ideológico-política del neoconservadurismo contra el enemigo exterior (URSS-Cuba), así como contra sus aliados nacionales, encarnados en la subversión interna y los proyectos alternativos. Fundado en abril de 1981, en Washington, D. C., por un grupo de activistas político-religiosos, principalmente evangélicos.

Autodefiniéndose en ese momento como un proyecto de la Foundation for Democratic Education, “creado para apoyar a las instituciones y valores democráticos”. En tanto que la Fundación era un proyecto especial, así como el organismo financiero de la Coalition for Democratic Majoraty.

Presentándose además tal Instituto, frente a la nueva derecha de ese momento en América Latina, con una imagen más moderada y “estratégica” de sus miembros y propuestas. Centrando sus acciones en problemas de política exterior. Así, sus primeras publicaciones hicieron referencia a El Salvador, Nicaragua, y a distintas cuestiones de Centroamérica y el Caribe.

Promueve asimismo, reformas en las iglesias evangélicas norteamericanas para controlar mejor sus definiciones políticas internacionales y dificultar el financiamiento a grupos cristianos progresistas de América Latina. Organiza campañas contra el creciente compromiso de los cristianos progresistas de Estados Unidos en la problemática centroamericana y caribeña, hostigando particularmente a los Consejos Nacional y Mundial de Iglesias de Cristo.

En tal sentido, el Instituto publicó un artículo en Readers Digest, mismo que parte de la pregunta ¿Cómo se están gastando los dólares de tu iglesia? y se responde que las ofrendas dominicales eran usadas para apoyar causas políticas: financiando movimientos guerrilleros apoyados por los soviéticos en África; pagando salarios y locales de oficina a individuos que ayudaban a los terroristas del FALN de Puerto Rico; montando campañas para promover los objetivos políticos de los regímenes de Cuba y Vietnam; subvencionando grupos de la OLP o que apoyaban al ayatollah Jomeini.

Más aun, el Institute on Religion and Democracy también se vinculó de manera directa con el neoconservadurismo más político. Principalmente por medio de la Coalition for Democracy Majoraty (CDM), creada en 1972 por prominentes demócratas y funcionarios de la AFL-CIO, contrarios a las políticas de la “nueva izquierda”. Siendo en ese momento su presidente Ben Wattenbey, y dentro de sus miembros más importantes se contó con Jeanne Kirkpatrick, misma que era embajadora estadounidense ante la ONU, y era conocida por sus posiciones reaccionarias hacia Centroamérica y América Latina en general.

Otra organización que estaría ligada a la CDM, sería el comité de ciudadanos para la libertad de las Américas, el cual fue creado como respuesta específica contra la creciente oposición a la política que mantenía el gobierno de Reagan hacia El Salvador, dedicándose a promover un tipo singular de “reforma agraria”, utilizado en Vietnam y que tendió a prevenir y combatir cambios radicales, principalmente en Centroamérica.

Respecto a la iglesia católica, se adoptaron aspectos como el de discursos netamente simbólicos, tales como la exaltación de figuras como las de Juan Pablo II y el cardenal Miguel Ovando y Bravo, arzobispo de Managua en ese momento. De forma que, los contrarrevolucionarios usaban llaveros con la efigie del Papa y lanzaban lemas reiterados como, “con Dios y patriotismo derrotaremos al comunismo”, “Decídase: Iglesia o Sandinista comunista” y “Cristo es el libertador”. A lo cual también se le sumaron emisiones contra la insurgencia, transmitidas por radiodifusoras como “15 de Septiembre”.

Así como se vería reflejado el apoyo en personajes como William Casey, a la guerra secreta desatada por Estado Unidos en Nicaragua (Irán-Contras), siendo éste un representante de una fracción de la derecha católica tradicional, nucleada en torno a la “Orden Militar Soberana de Malta”, misma que se encontraba proverbialmente ligada a la Agencia Central de Inteligencia.

El conservadurismo en México y la contrainsurgencia

En el contexto descrito arriba, los sectores ultraconservadores de México se confabularon para frenar el avance de lo que llamaban una conjura “judeo masónica comunista”. Aprovechando el miedo al comunismo y el afianzamiento de privilegios por parte de sectores empresariales, alentados por Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Así, a finales de los años sesenta, en Puebla y Guadalajara, se formaron bandas paramilitares ultraderechistas para luchar contra los estudiantes de izquierda y los sacerdotes progresistas.

Ejemplo de tal situación lo dará la Organiza-

ción Nacional del Yunque, organización que era secreta, de inspiración católica reclutaba jóvenes para adoctrinarlos y adiestrarlos en el combate físico e ideológico. Siendo el origen común de los organizadores, escuelas confesionales, como Cristóbal Colón, Simón Bolívar, Universidad La Salle, el Colegio Benavente (en Puebla) y bajo la dirección de la congregación religiosa llamada “Hermanos de las escuelas cristianas” o hermanos lallistas, con motivo del nombre del fundador de la Congregación, Juan Bautista La Salle. De tal manera, la Universidad La Salle, desde los años sesenta sería un semillero, en casi todos los planteles del país, de numerosos cuadros de dicha Organización. Así como se funda la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en 1974, por los mandos del Yunque.

Naciendo la Organización en Puebla, estado históricamente considerado como un enclave de los sectores más reaccionarios, ante la preeminencia del clero político, además de que en ese momento veía al PAN como parte de la conspiración mundial, hasta atribuir a Gómez Morín una ascendencia judía.

Alentados por la Iglesia católica, especialmente por el obispo Octavio Márquez y Toriz. Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid, conciben el Yunque. Además, la iglesia, unida a la oligarquía poblana para hacer frente al comunismo, financia a la Organización. Hecho que se expresó a partir de empresarios como Jorge Ocejo, gerente de la embotelladora Orange Crush, y cuyo hijo con el mismo nombre egresa, en 1961, del Colegio Benavente, al reunir dinero para financiar escuadras con armas y entrenamiento del Frente Universitario Anticomunista (FUA).

Así, dentro del Yunque, el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), fundado en 1961, así como su antecesor en Puebla, el Frente Universitario Anticomunista (FUA), en 1955, y la Guardia Unificadora Iberoamericana (GUIA), fundada en 1971, fueron organismos creados deliberadamente para operar públicamente y ocultar la verdadera estructura del Yunque. Así como se utiliza a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para avanzar políticamente en el país, particularmente en 1971, cuando logra incrustar a César Nava Miranda como presidente y Muggenburg como vicepresidente, junto con Velasco Arzac y Eduardo Turati en la mesa directiva.

Dándose a conocer el MURO por desbaratar conferencias y reuniones liberales o de izquierda, desarrollándose hasta conformar una camarilla universitaria fascista. De igual forma, el Opus Dei, sin conformarse como un partido político, ha sido un importante centro de ideas y actos políticos conservadores. E igual que el grupo conocido con el nombre de Los Tecos, surgido en Guadalajara, como

una de las fuerzas de derecha más extremistas del país. Mismos que han sido alentados por personajes como el obispo de Puebla, Octavio Márquez y Toriz; el de San Juan de los Lagos, Francisco Javier Nuño, y el de Nuevo Casas Grandes, Hilario Chávez Jolla, todos identificados con el combate a los “enemigos de la religión”.

Más aun, la nacionalización de la banca, en 1982, estimuló el activismo del Yunque, alterando con el reclutamiento y adiestramiento paramilitar de jóvenes con acciones políticas, mediante organismos empresariales como los foros “Atalaya” y “México en la libertad”. Mientras que en los noventas se desarrollaron otras agrupaciones impulsadas también por el Yunque como, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), Coordinadora Ciudadana, dirigidas por Sánchez Díaz de Rivera, y Vertebra, de Abascal Carranza, ambos presidentes de la Coparmex, desde 1993 hasta 1998, llegando su expansión hasta el 2000 al posicionarse en gobiernos estatales y el federal, por medio del PAN, dentro de los que sobre saldrán personajes como Luis Fernando Bravo Mena, Ana Teresa Aranda, Manuel Espino, Jorge Ocejo Moreno, entre otros.

Los grupos porriles en las universidades públicas

Los grupos de choque, también llamados grupos porriles, parecen remontarse a los años 20 del siglo pasado. Sin embargo, el porrismo cobrará cada vez más fuerza a partir de la década de los cuarenta en la UNAM, cuando las autoridades de la misma institución promueven la intervención de pistoleros como contención a las corrientes estudiantiles de izquierda gestadas dentro de la institución.

En la década de los 50 se forman organizaciones estudiantiles en el IPN que, aunque tienen un origen democrático, van adquiriendo apoyos y estructuras semejantes al sindicalismo oficial bajo la denominación de federaciones universitarias. Y dentro de estas organizaciones habrá un ala de choque para combatir la organización democrática del estudiantado. Así, para la década de los sesenta, tanto de la UNAM como el IPN, hay una vinculación entre los integrantes de los tradicionales grupos de animación de los equipos estudiantiles de fútbol americano, en México denominado “porras”, con grupos de choque, por lo que popularmente son comenzados a ser llamados “porros”.

Pero, especialmente, tras el fin del Movimiento de 1968, en México, luego del regreso a clases, los grupos porriles se activaron para contrarrestar la organización de los Comités de Lucha, en algunas escuelas consolidan su poder en los niveles medio superior y superior. En las vocacionales, en pocos años, los Comités de Lucha desaparecen y los grupos porriles se convierten en los dueños de la

situación. Más todavía, en el contexto de la Guerra Sucia en el país, tales asociaciones serán usadas con el fin de disuadir actividades u organizaciones con ideologías opositoras al gobierno mediante la violencia, la delincuencia y el espionaje.

De forma que, alternaran el cumplimiento de sus “funciones”, ya sea a petición de las mismas autoridades estudiantiles o del gobierno: infiltrándose en organizaciones estudiantiles, con fines diversos, ya fuera para obtener información, para intentar manipular, para amedrentar y agredir físicamente, para fracturar la organización o, en contextos de manifestaciones y protestas, para ejercer actos violentos que rompan el orden y, así, facilitarle a las autoridades justificar el uso de la fuerza pública, cometer detenciones a manifestantes y deslegitimar a los movimientos sociales.

Consolidándose el porrismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que a iniciativa expresa de rectores como Alfonso Pruneda, en los años veinte, se organizan grupos de prefectos que serían conocidos como “Los gorilas”, y en los treinta, el rector Luis Chico Goerne, organiza el primer grupo de choque conocido como “Pistoleros de la Rectoría”. Y ya para los cuarentas, con la llegada de Rudolfo Brito Foucher, se oficializa la contratación de “guardaespalda juveniles” para el rector.

Para los años cincuenta, los grupos porriles se transforman de organización estudiantil del IPN, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, dejando atrás su carácter representativo y popular, y adquiere los rasgos de corporativismo, violencia y supeditación al partido oficial que lo caracterizan hasta la fecha, ocurriendo igual en otros estados de la República. Con Miguel de la Madrid, los grupos porriles mediante las porras deportivas, mantendrá nexos con los grupos estudiantiles de izquierda, con el fin explícito de controlarlos y mediatizarlos.

Destacando en tal sentido durante los 60 y 70, grupos como el ya citado MURO y los “Halcones”, siendo estos últimos importantes para que se cometiera la matanza de estudiantes la plaza de Tlatelolco, Ciudad de México, en 1968, conocido como el “halconazo”.

Bajo tal espectro, los grupos de choque no se han limitado a contextos universitarios, aunque fueron creados en el seno del PRI, otros partidos políticos han hecho suyas sus prácticas. Usándolos el PRD, el PAN, el Partido Social Demócrata y el del Trabajo, no obstante mantienen sus servicios en las instituciones de bachillerato “tradicionales”, y a las cuales se les han sumado desde los noventa, el Colegio de Bachilleres, Conalep, Cebetis o Cebeta.

Mediante organizaciones como la Federa-

ción de Estudiantes Universitarios, la Alianza Universitaria y las Federaciones de Estudiantes de Naucalpan y Acatlán, el 3 de marzo, el Grupo Pedro de Alba, la Santa Inquisición, Bohemios, el Grupo de Animación Femenil, entre otros tantos que mantienen una actividad permanente en Ciudad Universitaria, logrando vínculos con preparatorias, colegios de bachilleres y demás.

Mientras que en el Instituto Politécnico Nacional, prevalecen la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET), la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), y la Federación de Estudiantes Politécnicos (FEP), mismas que también se han extendido a escuelas de bachillerato dependientes de la SEP.

Así, se han presentado casos como el del CE-CyT 4, “Lázaro Cárdenas” en el cual está un grupo autodenominado “26 de septiembre”, grupo porril de la FEP (Federación de Estudiantes Politécnicos), que mermo el trabajo del comité de lucha de la escuela que fue conseguido después de un paro estudiantil, y también ha intimidado a la comunidad del plantel. Otro caso ha sido el del CE-CyT 8, “Narciso Bassols”, donde los porros actúan amedrentando a los compañeros que pugnan por la educación pública y defienden sus derechos.

Aspectos que no pueden tener otro sentido, puesto que, el porrismo surgió para contrarrestar la organización estudiantil surgida después de 1968. De manera que, no obstante distintos comités de lucha mantuvieron una firme resistencia contra estos grupos y sostuvieron una organización estudiantil democrática en defensa de los intereses de los hijos de los trabajadores. En las escuelas donde los porros lograron presencia o incluso hegemonía, se han gestado luchas encarnizadas. Caso emblemático ha sido el del año 1987, donde los distintos comités de Lucha, que se agruparon en la Coordinadora Estudiantil Politécnica, llamaron a la lucha y se dio una huelga en 10 escuelas superiores que debilitaron al porrismo, pero no consiguieron erradicarlos del bachillerato.

Caso similar fue el de vocacional 7, en 1999, (impactados por la huelga de la UNAM) la comunidad erradicó del turno vespertino al porrismo, que era una violenta mafia, y al año siguiente hicieron lo mismo del turno matutino. Sin embargo, tal lucha pudo conservar sus logros, ya que no hubo una organización permanente, pese a que se logró un importante nivel organizativo. De forma que, cuando la generación que dio la lucha egresó, la organización se vino abajo y poco tiempo después se veía nuevamente al porrismo actuando en dicha vocacional.

Más todavía, los grupos porriles, ante el respaldo institucional con el que cuentan, donde

se ha llegado a encontrar que están dentro de la nómina de alguna delegación. Desde los años ochenta, el fenómeno se ha agudizado particularmente en el IPN, en donde los grupos porriles han gozado de privilegios como el cobro de cuotas por acceso a las universidades y extorsión a los profesores a cambio de “protección”. Y así, paulatinamente han transitado hacia la comisión de distintos delitos y actividades ilegales, tales como la extorsión, el robo y la venta de drogas al menudeo. Hasta enmarcarse los usos más recientes de porros o provocadores, conforme se ha manejado el gobierno priista en otras ocasiones, repitiendo el mismo patrón, según denuncias por parte del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), quien señalo la infiltración de personas ajenas a las manifestaciones suscitadas contra los aumentos a los precios de la gasolina que se dieron en el país a principios de año.

De acuerdo con el Centro, tales acciones formaron parte de una “estrategia gubernamental para intimidar las protestas y la inconformidad popular contra los gasolinazos y así justificar un uso de la fuerza desmedido”. Orquestándose una serie de saqueos a tiendas y comercios en diversos puntos del Estado de México, así como el estado de Hidalgo y Puebla. Mismos que generaron miedo en la población y creció el desconcierto, conforme se difundía información falsa por medio de twitter y whatsapp.

En el año 2006, el Yunque y los Tecos reactivaron sus respectivas fuerzas de choque para, eventualmente, proceder con violencia contra Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes, al reclamar que se limpiaran las elecciones presidenciales. Las dos organizaciones secretas, se reagruparon para emprender durante la contienda presidencial, y mediante los sectores que controlan, acciones de propaganda contra López Obrador, acuartelándose para garantizar el triunfo del entonces candidato del PAN, Felipe Calderón.

Acciones que se realizaron junto con las de la Sociedad en Movimiento y el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), supeditadas al Yunque, y siendo que la última agrupación gastó casi 37 millones de pesos en una campaña de radio y televisión para sembrar el miedo comparando a López Obrador con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y dentro de la misma lógica también se inscribió, la tormenta de promocionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por José Luis Barraza, expresidente de Coparmex, con un costo de 136 millones de pesos, según el monitoreo del Instituto Federal Electoral (IFE). **NT**

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

BARBARIE EN LAS VEGAS

** Los análisis que se proponen ser más críticos que el promedio de narrativas que circulan en el espacio público terminan por afirmar que el problema de la violencia en Estados Unidos, en realidad, no tienen nada que ver ni con los migrantes, ni con los terroristas, ni con el desempleo, ni con el consumo de estupefacientes, sino con el hecho de que de cada diez habitantes del territorio estadounidense, nueve cuentan con una arma de fuego.*



Ricardo Orozco
Rebellón

El debate que se ha desencadenado en la opinión pública nacional, en torno del tiroteo que despojó de su vida a medio centenar de personas, en un evento musical público, en Las Vegas, Nevada; recuerda, en primera instancia, todas esas ocasiones en las que ese mismo debate se ha tenido que reciclar a sí mismo cada vez que un evento similar ocurre en Estados Unidos, saturando la discusión con algunos espacios comunes sobre los cuales, en un lapso temporal relativamente corto, se montan construcciones analíticas viciadas y sin capacidades de problematizar los puntos genealógicos, es decir, originarios, desde los cuales se forja la sistematicidad de hechos como el presente.

En términos generales, esos espacios comunes, esas analíticas viciadas, ese sentido común en torno de lo que en el imaginario colectivo estadounidense es denominado indistintamente como

una masacre (massacre) o un tiroteo (shooting) se reducen, en última instancia, a una narrativa del terror, pese a que su derivación en discursos sobre terrorismo depende, por entero, de la pertenencia racial, nacional, religiosa, cultural etc., de quien ejecute el acto en cuestión. Así pues, el hilo o la continuidad discursiva que atraviesa las narrativas de atentados como los de Virginia Tech, Virginia (2007); Newton, Connecticut (2012); San Bernardino, California (2015); y Orlando, Florida (2016); es una en la que el terror se presenta como el elemento constructor de las oposiciones entre seguridad e inseguridad; entre libertad y coacción; entre lo propio y o ajeno; entre la identidad y la otredad, etcétera. Pero ello, sin que en ese discursar se enuncie al terrorismo, como experiencia y fenómeno sociopolíticos concretos, pues derivar el acto a su denominación como atentado terrorista depende de que quien discurre, quien se coloca en la posición de observador

o de víctima del atentado identifique y construya a un enemigo, a una otredad en el perpetrador.

En este sentido, si bien el discurso sobre el terror se mantiene presente en las narrativas de todos los eventos mencionados —reforzando los dispositivos de poder que el Estado monta sobre las nociones de seguridad, paz y orden públicos—, sólo los casos en los que el ejecutor es un sujeto perteneciente a otra raza, a otra nacionalidad, a otro culto religioso, a otra cultura, etc., el acto se vuelve un atentado terrorista, y tal es el tratamiento analítico que se le da en el espacio público. El terrorismo, pues, para un observador estadounidense blanco, anglosajón y protestante es un término reservado para negros, latinos, musulmanes, y así sucesivamente. La cuestión es, no obstante, que para llegar a ese tipo de conclusiones se debió transitar por otras series de análisis que fungan como premisas generales de

aquellas a partir de la puesta en juego de puras tautologías. Y entre éstas, dos son las series dominantes. Por un lado, se encuentra aquella en la que se construye la personalidad del ejecutor. Es fácil de observar porque, para todos sus efectos, es en el análisis de la personalidad del sujeto que se busca encontrar las causas últimas, las razones que tuvo éste para realizar tales actos tan inhumanos.

No es una estrategia discursiva nueva, por supuesto. Desde que el terrorismo comenzó a introducirse en el debate público internacional, entre los años sesenta y setenta del siglo pasado, identificar el perfil psicológico de los perpetradores se convirtió en un método que, se argumenta, ofrece una representación fil de los problemas que los terroristas tienen en contra de la humanidad; de su desconexión con lo humano, con lo social y lo común. En el evento de Las Vegas, por ejemplo, la discusión se encuentra dominada por el análisis de su situación laboral, del segmento socioeconómico al que pertenece, del tipo de relación que tenía con sus amigos, vecinos y familiares, de sus antecedentes penales, de sus historiales académico y de salubridad, de sus gustos y pasatiempos, etcétera. Y la cuestión es que, en este tipo de analítica, lo que no se está observando es la manera en que se está construyendo la personalidad del sujeto de manera tal en que éste ya se parezca a su delito o a su acto terrorista muchísimo antes de que éste siquiera fuera cometido por aquel.

Contar con baja autoestima, haber transicionado por una infancia o una adolescencia solitaria, ser sicológica o emocionalmente inmaduro, tener una personalidad poco estructurada, haber sufrido carencias afectivas, tener una mala o una pobre apreciación de la realidad, estar desequilibrado afectivamente, etc., se convierten en justificantes sicológicos de una personalidad asesina, violenta, terrorista introduciendo la idea de que el asesino, el violento y el terrorista ya lo eran desde el primer momento en que su vida cotidiana se vio afectada por alguna de estas condiciones emocionales y cognitiva.

El problema es que se parte de la noción de que existe un punto cero, una regla general o una especie de normalidad en cada una de esas condiciones: se parte de la idea de que existe una personalidad normal (una normalidad sicológica, afectiva, emocional, cognitiva, etc.), fuera de cuyos parámetros ya se está dentro de una condición patológica, potencialmente peligrosa tanto para el propio individuo como para la sociedad en la que

se desenvuelve. Y lo cierto es que esto es un problema porque anula por completo el peso y la determinación que la sociedad, la política y la cultura tienen sobre el comportamiento del ser humano.

En otras palabras, individualiza la violencia: exculpa a la sociedad de esos contenidos sociales, políticos y culturales que reproducen sistemáticamente la violencia, la muerte, el terror para mantener o cambiar el estado de cosas vigente. Y entonces, poco importa que sociedades como la estadounidense se basen en una concepción de libertad individual en la que sistemáticamente se reproduce la idea de que la comunidad es un peligro para el propio individuo. Pero no sólo, pues son análisis que omiten que esa misma sociedad reproduce, también de manera sistemática, el recurso a la guerra como preconditionante para la paz y la estabilidad; omiten que la tortura a los prisioneros de guerra, en Guantánamo, es una práctica socialmente aceptada, validada e interiorizada, and so on.

En este sentido, la segunda serie de tautologías dominante es aquella en la que se construye el entendimiento de la violencia como una propiedad incrustada en la técnica, ajena y exterior al individuo. Aquí, el problema es que se lleva a los extremos del absurdo la premisa de que la fuente de todo evento violento, como las masacres y los tiroteos públicos en Estados Unidos, se encuentra en las armas que circulan en la sociedad, como si con el hecho de retirar cada arma, real o potencial, hiciese que los sujetos sociales dejen de ser violentos.

Así pues, los análisis que se proponen ser más críticos que el promedio de narrativas que circulan en el espacio público terminan por afirmar que el problema de la violencia en Estados Unidos, en realidad, no tienen nada que ver ni con los migrantes, ni con los terroristas, ni con el desempleo, ni con el consumo de estupefacientes, sino con el hecho de que de cada diez habitantes del territorio estadounidense, nueve cuentan con una arma de fuego. De ahí que esgriman como su indicador más irrefutable el hecho de que en las sociedades primermundistas con menor cantidad de armas en manos de los ciudadanos sean, al mismo tiempo, las sociedades con menores índices de violencia, en general; y de homicidios, en particular —por oposición, claro está, a las sociedades con mayor número de armas, que serían las más violentas.

Y este es un extremo de lo absurdo porque hace suponer que la violencia emana de las armas, y no de un sujeto que

se encuentra inscrito en un contenido cultural determinado. Que las sociedades con menor circulación de armas de fuego sean las sociedades con menores índices de violencia y de homicidios no se debe a la escasez de armas. Por lo contrario, el que existan menos armas en circulación es consecuencia de una cultura que las repudia como instrumento o técnica válida para su uso en sociedad. De tal suerte que la ecuación correcta es la opuesta a la que se reproduce en el sentido común: las armas son consecuencia de una determinada configuración y de un específico contenido cultural, y no su determinante. En Estados Unidos, mientras se siga valorando más una cultura individualista, en la que las personas conciben a su comunidad y a su sociedad como un peligro inminente en contra de su libertad; mientras no se logre establecer vínculos sociales que den coerción al contenido comunitario —más allá del contacto esporádico que se establece a través de los canales de producción y consumo de mercancías—; mientras la guerra y sus derivaciones civiles en los cuerpos de seguridad pública no dejen de ser preconditionación para el mantenimiento de la paz, la seguridad y el orden sociales el contenido cultural sobre el cual se asienta la conciencia violenta de la colectividad no desaparecerá, y eventos como los de Las Vegas continuarán sucediendo.

Finalmente, no sobra señalar que el perfil sicoemocional de Stephen Craig Paddock, el tirador de Las Vegas, pese a contener elementos que en cualquier otra situación lo catalogarían como terrorista de inmediato, su caso se encuentra atravesado por una discursividad racial, en pertenencia al núcleo social estadounidense (blanco, anglosajón y protestante) lo blindo y lo abstraer de dicha denominación. La sentencia de su padre, Benjamin Paddock, a veinte años de prisión por robo a un banco; y su designación por el FBI como psicópata al que le gustan las armas; así como la experiencia laboral de Craig en la industria armamentista, su gusto por la caza de animales salvajes y el haber contado con más armas en su hogar que la veintena que lleva encima al momento de disparar; habrían sido motivos suficientes para declararlo como un terrorista profesional, de haber sido negro, musulmán o extranjero.

* Publicado originalmente en: <https://columnamx.blogspot.mx/2017/10/individualismo-y-barbarie-en-las-vegas.html>

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Reforma educativa colapsada

En el panorama nacional se observa a un secretario de Educación en conferencias de prensa, entrevistas, poses en escenarios de la catástrofe como si fuera parte de una campaña personal.

Luis Zamora Calzada

La educación en México se encuentra colapsada no sólo por los edificios dañados ni la infraestructura que no soportó el temblor. A ello se agrega otra gran debilidad del sistema, el Estado mexicano no cuenta con previsiones educativas frente a tragedias naturales como la que vivió nuestro país el pasado 19 de septiembre.

Maestros y estudiantes no sabían qué hacer por la falta de protocolos durante el evento —suponiendo sin conceder que los simulacros fueron útiles durante el movimiento telúrico—, quedaron indefensos después de que pasó el temblor, se perdieron tiempos por la ausencia de estrategias.

A más de dos semanas de la tragedia no hay atención para quienes sufrieron traumas diversas en las escuelas, las autoridades de todo tipo están enmudecidas respecto a quién o quiénes repondrán los materiales perdidos y, sobre todo, cómo y dónde se va a trabajar con los alumnos.

Los maestros están pasmados, experimentando actos de reclutamiento en escuelas sin alumnos y sin garantías de seguridad, en algunos casos, con arranques de irracionalidad de directivos y supervisores con constantes amenazas de reportes de faltas a los docentes que no acudan a las instituciones, para aplicar los descuentos a sus salarios, ya paupérrimos por la difícil situación del bajo poder adquisitivo que se vive, todo ello al amparo de supuestas “indicaciones de arriba” que no saben precisar.

Lamentable, aún en estas circunstancias, el espíritu represor de muchos no disminuye, les sale a flote con más ingredientes dignos de análisis psicológicos profundos para entender la actuación.

En el panorama nacional se observa a un secretario de Educación en conferencias de prensa, entrevistas, poses en escenarios de la catástrofe como si fuera parte de una campaña personal. Resulta incomprensible la difusión nacional del “nuevo modelo educativo, educación integral para el siglo XXI”, divulgada el 29 de septiembre en todo el país en medios impresos, en planas completas, si bien en páginas intermedias ocupando todo el espacio con costos que pudieron destinarse a otras necesidades de emergencia educativa.

Se ignora si alguien hizo caso a la explicación de su estrategia nacional de enseñar inglés, con la promesa poli-

tica de que en 20 años todos los egresados de prepa hablarán ese idioma y probablemente entiendan que será una herramienta en el siglo XXI. ¿En qué? ¿Quién sabe? La autoridad educativa no reacciona, no hay ninguna propuesta para que los estudiantes sigan aprendiendo en sus casas; si se sostiene que ellos son el centro de la reforma educativa. ¿Por qué han quedado a la deriva y en el olvido temporal, con la escuela y los maestros ausentes? ¿Cómo avanzarán después de la experiencia vivida? A todas luces no resultan suficientes ni aportan desde ningún punto de vista pedagógico.

Las estrategias de tenerlos pegados a la televisión, esperando ansiosos el rescate de la inexistente “Frida Sofía”. Así no se aprende, porque los llevaron a la frustración y al enojo, quizá la mayor “ganancia”, si es que la hubo, fue cuestionarse por qué el engaño de la televisión, para qué jugar con los sentimientos: más de fondo, si fue una simple distracción o un medio de control político y social. El inútil reclutamiento de maestros en escuelas sin alumnos representa un extremo riesgoso que deja la nulidad estratégica para la capacitación de maestros. ¿Dónde queda la tecnología, las plataformas educativas que ofertan educación o los programas de televisión educativa para los alumnos? La inacción de la autoridad educativa es una muestra clara de deficiencia.

Desgraciadamente es observable una SEP rebasada, únicamente buscando votos. En las conferencias y entrevistas publicadas no se ha colocado en el centro a los estudiantes y sus aprendizajes, ese lugar lo ocupan la política y las aspiraciones personales del funcionario titular en turno.

Conciliación laboral

Los conflictos laborales que se ventilan en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (TECA), se han caracterizado por ser juicios tortuosos, con dilaciones innecesarias en perjuicio de los trabajadores. Una constante es el no acatamiento de los tiempos establecidos para desarrollar el procedimiento en los términos que su ley les obliga, determinan fechas muy lejanas para las audiencias que debieran ser casi inmediatas entre una actuación y otra, se reservan emitir acuerdos sin razón alguna, tardan todo para cansar al trabajador y generarle hastío, desesperación, hambre, vivir la injusticia para, finalmente, someterlo a la instancia gubernativa que lo despidió.

Al concluir el procedimiento (ingreso y contestación de

demanda, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, alegatos y cierre) continúa el dictado de la sentencia o laudo, que pueden pasar los meses y los años, como dice la canción, sin que salga.

Es preferible en una gran cantidad de expedientes acudir al amparo de la justicia federal para que requiera al Tribunal la emisión del documento.

¡Sorpresa! Cuando llega a emitirse, generalmente sale un laudo en contra del trabajador, que desanima y enoja a muchos cuando no conocen la tendencia de la actuación de la supuesta instancia impartidora de justicia laboral en la entidad. Desde el referente del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), hemos observado que mientras más rápido salga el asunto del Tribunal es mejor, así acudimos a los amparos directos que resuelven los magistrados federales en los tribunales colegiados en la materia.

Al ser notorias las violaciones e ilegalidades que comete el TECA en sus dictados, a manera de ejemplo, no se olvida uno de tantos asuntos instaurados: un funcionario de ese lugar sostenía que ellos sabrían si ganaban o perdían el laudo hasta que llegara la determinación de los magistrados federales.

Lo anterior resulta incomprensible, por decir poco. Ellos, la supuesta autoridad, no es parte del juicio, no pueden estar a favor de ninguna de las partes. Sin embargo se inclinan a favor de la contraparte del trabajador, los casos que sostienen el respeto son mucho y los tenemos física y digitalmente.

Esta postura ha etiquetado una injusticia laboral predominante en los gobiernos anteriores y las secuelas presentes en muchas actuaciones de los funcionarios del TECA en perjuicio del trabajador que sufre de la injusticia de un gobierno, siguen presentes.

El panorama puede cambiar, un juicio laboral puede ya no alargarse ocho, diez años o más, como ocurre actualmente. La solución es acatar los términos que les establece su ley al determinarles 48 días entre el ingreso de la demanda y la audiencia de conciliación, lo que no ocurre, por supuesto.

La emisión del laudo observando el principio de celeridad procesal, sin determinar tiempo, y su discusión y aprobación en un término no mayor de 15 días, como lo señala en el articulado la ley que rige su actuar, término que tampoco se respeta.

En el supuesto de que se dé el acatamiento de los tiempos establecidos, a ello se agregaría la postura de conciliación que propone el recién nombrado Presidente del TECA, quien se encuentra generando reuniones entre las partes para llegar a acuerdos y convenios que pongan fin a los conflictos laborales.

Ha hecho público que invariablemente, todos los jueves se realizan reuniones de conciliación. De lograr acuerdos permitirá a las instancias gubernativas un ahorro en pagos de juicios costos por los tiempos que duran, en virtud de evitar el encarecimiento del expediente de las demandas laborales instauradas en su contra.

El proyecto es atractivo. **NT**





Policías de Investigación de Fiscalía mexiquense realizarán estudios de licenciatura en UAEM

Con una óptica de mayor alcance para coadyuvar a fortalecer el sistema de procuración de justicia, la Administración 2017-2021 de la UAEM refrenda su voluntad de colaboración con la Fiscalía y continuará trabajando en la profesionalización del personal que en ella labora, afirmó el rector Alfredo Barrera Baca.

Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizarán estudios de nivel superior en la modalidad a distancia, en la Universidad Autónoma del Estado de México, como resultado del esfuerzo coordinado que desde hace décadas realizan ambas instancias.

Con una óptica de mayor alcance para coadyuvar a fortalecer el sistema de procuración de justicia, la Administración 2017-2021 de la UAEM refrenda su voluntad de colaboración con la Fiscalía y continuará trabajando en la profesionalización del personal que en ella labora, afirmó el rector Alfredo Barrera Baca.

Durante la reunión que sostuvo con el titular de la Fiscalía, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, el rector expresó que mediante la colaboración con el sector público, la Autónoma mexiquense contribuye en el desarrollo de acciones en beneficio de la sociedad.

Indicó que la UAEM y la Fiscalía refrendarán sus lazos de colaboración en materia académica, para el desarrollo de proyectos, por ejemplo, para la profesionalización de los policías de investigación, en el ámbito de la Medicina Forense y la Contaduría.

En este contexto, Alejandro Jaime Gómez Sánchez explicó que como lo exige la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es necesario que los policías de investigación cuenten con educación superior y con ello, obtengan el Certificado Único Policial, lo que permitiría, posteriormente, establecer el Servicio Profesional de Carrera y que las plazas laborales se sometan a concurso. Tenemos, afirmó, un gran capital humano en la fiscalía, tenemos policías que tienen mucha experiencia, pero les falta el requisito de contar con educación superior para obtener el Certificado Único Policial.

Gómez Sánchez reconoció que si se quiere tener el nivel estándar de investigación que está exigiendo la Constitución, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y fortalecer a su vez, un sistema de procuración de justicia que sea para todos los mexiquenses y que sea eficaz, se necesita tener policías preparados.

Finalmente, Alfredo Barrera Baca agradeció la confianza que la Fiscalía deposita en la Máxima Casa de Estudios mexiquense, así como la voluntad de colaborar para el fortalecimiento del trabajo académico, en beneficio de la sociedad.

